



"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"
"AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL AMAUTA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS"

ACUERDO REGIONAL N° 269-2011-GRJ/CR.

POR CUANTO:

El Consejo Regional de Junín, en Sesión Ordinaria Descentralizada a los 28 días del mes de junio de 2011, en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Ahuac de la Provincia de Chupaca, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política del Perú; en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y demás Normas Complementarias.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 192° de la Constitución Política del Perú de 1993, modificado por Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización N° 27680, establece, que los Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo;

Que, el artículo 2° del Reglamento Interno del Consejo Regional Junín, prescribe que "El Consejo Regional es el órgano supremo y representativo del Gobierno Regional. Ejerce las funciones normativas, investigadoras, y de fiscalización de la gestión ejecutiva y administrativa del Gobierno Regional, de la gestión y conducta pública de los funcionarios del mismo, y las demás que establece la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Bases de Descentralización N° 27783 y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 y sus modificatorias;

Que, mediante Acuerdo Regional N° 261-2011-GRJ/CR, de 21 de junio de 2011, se encarga a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, de la mujer y la familia, formular el pronunciamiento solicitando la modificación del Decreto Supremo N° 051-2011-PCM, y se publicara en el Diario oficial el Peruano y en el diario de mayor circulación Regional; asimismo encarga al ejecutivo del Gobierno Regional Junín establecer coordinaciones con las demás regiones afectadas con la emisión del Decreto Supremo N° 051-2011-PCM, a fin de aunar fuerzas y tramitar su modificatoria;

Que, el Presidente de la Comisión Permanente procede a dar lectura a la propuesta de Pronunciamiento; la Consejera Silvia Castillo Vargas, solicita que se corrija el segundo nombre del Presidente de la República; El Consejero Ginés Barrios Alderete, señala que en el primer párrafo se hace un sustento legal Constitucional antidiscriminatorio, y en el párrafo siguiente se asume una actitud totalmente discriminatoria comenzando por la investidura del Presidente del Gobierno Central, solicitando respeto al Presidente Constitucional de la Republica, manifestando que no está de acuerdo en ponerle un precio irrisorio a la vida lo cual rechaza; la Consejera Lucinda Quispealaya Salvatierra, solicita que se apruebe el pronunciamiento contra el Decreto Supremo N° 051-2011-PCM, el mismo que considera una forma de discriminación atentatoria contra la dignidad humana; el Consejero Víctor Torres Montalvo, manifiesta que en la sesión anterior se acordó en que el presente pronunciamiento será de conocimiento del Presidente Regional de manera que se aúna al trabajo mancomunado de las regiones para que se emita un pronunciamiento en conjunto porque no es un tema que solo compete a Junín sino a toda la nación;

Que, los numerales 1) y 2) del artículo 3° del Decreto Supremo N° 051-2011-PCM, establece el plazo de conclusión del Proceso de determinación e identificación de los beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas y la oportunidad de otorgamientos de las reparaciones económica, prescribe que el monto de reparación económica ascenderá a S/. 10 000 (diez mil y 00/100 nuevos soles) por víctima desaparecida, o por víctima fallecida, o por víctima de violación sexual o por víctima con discapacidad conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 28592 Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-JUS; cuando el cónyuge o concubino sobreviviente concorra con otros familiares de las víctimas desaparecidas o fallecidas, el 50% corresponderá al cónyuge o concubino y el otro 50% se distribuirá en partes iguales entre los familiares. Se consideran familiares de las víctimas desaparecidas o fallecidas aquellas señaladas en el inciso a) del artículo 6° de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones;

Que, la Única Disposición Complementaria Final de la norma acotada, señala que la primera etapa de ejecución del Programa de Reparaciones Económicas se inicia en el presente año fiscal con la entrega de reparaciones a los beneficiarios inscritos en el Registro Único de Víctimas conforme a lo establecido en el artículo 40° del Reglamento de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, que cumplan las siguientes condiciones: Ser cónyuges o concubinos de la víctima muerta o desaparecida, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente



norma tengan 65 años o más, de acuerdo a la disposición presupuestal y a los procedimientos a que se hace mención en el artículo 37° del Reglamento de la Ley N° 28592; Ser padres de la víctima muerta o desaparecida, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma tengan 80 años o más, que no cuenten con soporte familiar; y Ser víctimas de violación sexual o víctimas con discapacidad como resultado de la violencia sufrida, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma tengan 65 años o más;

Que, el artículo 39° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano, institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 9°, 10°, 11°, 15° y 37° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y su Reglamento Interno;

El Consejo Regional con el voto **UNÁNIME** de sus miembros:

ACUERDA:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el pronunciamiento contra el Decreto Supremo N° 051-2011-PCM, siguiente:

Decreto Supremo N° 051-2011-PCM

Discriminatoria y atentatoria contra la dignidad humana

La Constitución Política del Perú en su artículo 1° prescribe que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, y, a continuación en el numeral 1) y 2), del artículo 2°, señala con claridad que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, asimismo a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole, en consecuencia, todo programa de reparación debe enmarcarse dentro del estricto respeto a su dignidad y sus derechos.

Sin embargo el Gobierno peruano, encabezado por el Dr. Alan Gabriel García Pérez, una vez más demostró su sarcasmo y burla por los derechos humanos, y su total indiferencia y desinterés por la igualdad de toda persona ante la ley, sin discriminación de ninguna índole.

El Ejecutivo ha fijado burlescamente y atentando la dignidad humana, un monto de reparación a las víctimas y beneficiarios de las víctimas desaparecidas forzosamente, secuestrados, fallecidas, ejecutados extrajudicialmente, asesinada, reclutamiento forzado, abusada sexualmente o discapacitada como consecuencia del periodo de violencia política, en la suma de 10 mil soles.

Teniendo en cuenta que el Decreto Supremo N° 051-2011-PCM, regula la implementación de un programa de reparaciones y del proceso de reparaciones en general, es necesario que dicho Decreto Supremo haya sido aprobado por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, puesto que, tiene como función el diseño de la política nacional de paz, reconciliación y reparación, de conformidad con el artículo 8° de la Ley N° 28592 y los artículos 59° y 60° del Decreto Supremo N° 015-2006-PCM y de su Reglamento Interno y al no contar con este requisito, el citado dispositivo es irrito, en su totalidad, no debe surtir efectos jurídicos y por lo tanto debe ser derogado y consecuentemente emitirse otra norma que la reemplace y que contenga montos económicos de reparación dignos que serviría como base para la reconciliación nacional y el fortalecimiento del proceso de transición democrática.

Consideramos que el monto de S/. 10,000.00 nuevos soles, es discriminante, máxime, si ya se han considerado montos de indemnizaciones de S/. 30,000.00 nuevos soles, para los miembros de Comités de Defensa, otorgados por el Ministerio de Defensa en febrero de 2010, igualmente se deben tener presente que la edad de los beneficiarios, no puede ser ninguna limitante para percibir los montos dinerarios por concepto de reparación.

Huancayo, 28 de junio de 2011

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSEJO REGIONAL


Dr. Eddy R. Misari Conde
CONSEJERO DELEGADO